

Dispatches **BOLIVIA ETHIOPIA GUATEMALA PALESTINE PARAGUAY PERU USA**



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

Ciudadanía activa ante resultados ilegítimos y democracia golpeada

Hace apenas unos días que Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tuvieron que renunciar al gobierno ejercido durante casi 14 años continuos, acorralados y empujados por una activa movilización ciudadana que no cesó durante 21 días, hasta desencadenar los dispositivos constitucionales de sucesión que encargan a Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del senado, el gobierno transitorio encargado de llevar adelante en el próximo trimestre nuevas elecciones.

El proceso se desató el pasado 20 de octubre, cuando comenzaron a circular en medios de información, en las calles y en redes sociales, dudas sobre la transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el manejo de los resultados de las elecciones generales cumplidas ese día. Las principales llamadas de atención fueron la decisión del TSE de suspender la emisión de datos del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un apresurado mensaje del presidente del Estado anunciando su holgada victoria de 50.60 por ciento (lo cual eliminaría la necesidad de segunda vuelta y parecía una orden al obediente TSE) y la aparición de múltiples quejas ciudadanas sobre actas manipuladas y material electoral desechado. Hasta ese momento, los primeros informes del TREP coincidían con los resultados de tres encuestas que hacía prever la segunda vuelta, realizadas por distintas instituciones, una de ellas contratada por el propio TSE. Todo esto fue certificado por una Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que realizó la auditoría a solicitud del propio gobierno que, sin embargo, luego se negó a reconocer.

El descontento ciudadano comenzó mucho antes, con el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, cuando ganó por mayoría absoluta la negativa ciudadana a aprobar una nueva candidatura de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Al desconocimiento del carácter vinculante de esos resultados siguieron cambios en la normativa electoral que favorecían al binomio y al partido oficialista, una descarada cooptación del TSE, la desobediencia del binomio a las restricciones de hacer campaña política partidaria con el ejercicio y los bienes del Estado, y el corolario, la manipulación de los datos del sistema de cómputo para asegurar la victoria del MAS en primera vuelta.

¡Qué lejos parece ese 22 de enero del año 2006, cuando Evo Morales inició su primer período presidencial, ungido con 54 por ciento de los votos de la ciudadanía boliviana! Un momento casi épico para quienes pensaban que las promesas de cambio del Movimiento al Socialismo (MAS) y “un indio en el gobierno” harían la diferencia en un país saliendo apenas de una crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, de la turbulencia de las movilizaciones y de la anomia social, consecuencias de recurrentes pactos políticos que se agotaban en su mezquino e ineficiente manejo del poder.

El Evo Morales que llegó a México como asilado ya no es más el líder bendecido por porcentajes de votación nunca vistos en el país, ni por la expectativa de que cambiaría el peso de una balanza de injusticia y discriminación históricas. Su discurso fue el rabioso y victimizado alegato contra un supuesto golpe de estado, convocando a sus seguidores a mantenerse movilizados en las calles. El mensaje fue claro: conmigo o con el caos. El devenir de las próximas semanas, en medio de la violencia y el desorden promovidos por el MAS, la ciudadanía y las autoridades transitorias tendrán que encargarse de desmentir ese mensaje.

ETHIOPIA

Addressing Gender Gaps in Artisanal Mining Sector in Ethiopia

In terms of *de jure* gender equality, Ethiopia has a sound legal framework. Ethiopia has ratified the Convention on the Political Rights of Women, the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women and endorsed the Sustainable Development Goals. The country has also adopted the principles of the Beijing Platform for Action and the African Charter on Human and Peoples' Rights. These commitments are supported by the Constitution which promotes equal participation of women and men in political, social and economic spheres of life and underpins the National Policy of Women. Several other policies and laws have since been enacted or updated to increase women's age of marriage to 18 years; afford women a share of assets following a dissolution of union; criminalize domestic violence, rape, female genital mutilation, abduction and early marriage; and create violence free working environments.

In terms of *de facto* gender equality, Ethiopia is facing challenges. This is particularly the case of the Artisanal and Small-scale Mining (ASM) sector, despite the fact the Ethiopian government prioritised it as part of its national reform agenda and its commitment to develop the extractive sector through the Growth and Transformation Plan II (GTP II). The most salient gender issues identified include: women's lack of involvement in high level positions in ASM groups; unequal women's participation in decision making and access to mining licences; women's exposure to environmental pollution; women's limited participation in community development activities and skills development initiative; and gender stereotyping. In addition to those issues, limited accountability on gender mainstreaming hinders the effective integration of gender in all areas and all levels of the ASM sector.

Non-gender neutral and/or gender-blind mining policies and laws have been identified as the key obstacles to the achievement of *de facto* gender equality in the ASM sector. A few examples of potential negative impacts of gender neutral policies include: (1) ASM licensing requirements for cooperative formation that strengthen (and legitimize pre-existing) control of sites by men, resulting in unequal benefits and increased risks of harassment, intimidation, exploitation and other forms of violence; (2) Legal criteria for consultative processes that exclude the needs of women and vulnerable persons (e.g. location of roads, boreholes, and formulation of corporate social responsibility projects); (3) Compensation and resettlement processes because of exploration typically negotiated with male leaders, with women having little to say on issues that directly affect them (e.g. uprooting of crops for household consumption, disturbance to family unit because of relocation, use of compensations).

In order to promote gender equality and women's empowerment in the ASM sector, the Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) has taken very concrete actions to incorporate gender equality considerations in indicators, implementation plans, and monitoring and evaluation across the ASM sector and the GTP II in general. Several interventions have been started, including strengthening of MoMP gender competence around legal and policy framework, building gender capacity and understanding among key MoMP decision-makers and parliamentarians, and promoting women groups engagement in policy and legal reviews.



Photo by Rahel Getachew



Chi Pam



Rahel Getachew

It is expected that a mechanism will be put in place so that gender is adequately incorporated prior to finalization and adoption of a new mining policy and law. And in the long run, the equality in participation and distribution of development benefits such as better access to education and training, improved living conditions will be ensured for women and girls.

GUATEMALA

Legalidad y legitimidad de las elecciones presidenciales en Guatemala

Las elecciones de autoridades en Guatemala tuvieron lugar en los meses de junio de 2019 (primera vuelta) y agosto de este mismo año (balotaje). Como nunca sucedió en los anteriores procesos, algunos actores del sistema de justicia e instituciones de control democrático fueron determinantes en el dibujo final de la oferta electoral.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), La Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), habitualmente sólo figurantes, adquirieron esta vez un papel de primer orden para permitir o impedir la participación de candidatos a cargos de elección popular en general y a la Presidencia de la República específicamente.

A pocos meses de la elección, las encuestas mostraron que la intención de voto se inclinaba por tres mujeres de diferentes posiciones ideológicas. Sandra Torres de orientación populista, la exfiscal general Thelma Aldana de derecha progresista y Zuri Ríos de orientación conservadora. Era previsible que una de ellas sería electa presidente de la República. No obstante, la acción de los órganos de justicia y control dejó fuera a dos, mientras fue ineficaz para detener la cuestionada participación de la candidata puntera en la intención de voto, que finalmente fue derrotada en el balotaje por Alejandro Giammattei un candidato de derecha relegado al cuarto lugar en la simpatía de los electores.

¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué el resultado final de las elecciones contradujo la manifiesta preferencia de los electores? ¿Se convirtió la votación en apenas una formalidad del ejercicio del derecho ciudadano a elegir?... judicialización de la política, politización de la justicia... probablemente.

La indiscutible paradoja es que las acciones para certificar formalmente la legalidad del proceso electoral mermaron la legitimidad de los resultados.



Otto Valle Bonilla

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Palestinian Refugees and Human Rights

The situation of the Palestinian refugees is one of the most prolonged humanitarian, legal and political crisis in the world. It has not been resolved due to the continued Israeli occupation and the failure of the international community to defend the Palestinian refugees' rights under international humanitarian law. International efforts have been limited to alleviating the suffering of refugees by providing in-kind and material assistance to the refugee camps and services from the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). International contributions to UNRWA have sharply declined in recent years.

Palestinian refugees constitute about half of the total population of the Palestinian people; all living with their most basic human, civil, political, economic, social and cultural rights violated, and deprived of appropriate international protection and assistance. The Gaza Strip suffers from a major humanitarian and health catastrophe due to the Israeli land, sea and airspace blockade which violates international law. More than 2 million Palestinians live in the Gaza Strip, 70% of whom are refugees and have been subjected to violent deaths and injuries, including children and school students (UNRWA, 2018). More than half a million Palestinians have been forcibly displaced for the second time after three consecutive Israeli wars on the Gaza Strip, closure of crossings, high unemployment rates up to 47% (2019 World Bank Report), poverty rates up to 53% (Palestinian Central Bureau of Statistics 2019), and the contamination of drinking water and food insecurity. Hundreds of Palestinians have been forced to flee by sea for a third refuge and dozens



Samar Awadallah

have drowned in the attempt. The scene in al-Yarmouk Palestinian refugee camp in Syria, which was besieged in 2015, was not much different. This camp was deprived of food, medicines, medical supplies, children's vaccines, fuel/gas and educational activities, forcing the refugees to escape again to other places (including to Europe by sea), which ended up meaning death for some rather than the escape they hoped for.

During interviews with 71 Palestinian refugees from five continents and refugee camps in Lebanon, Syria, Jordan and Palestine, on the 71st anniversary of the ongoing Al Nakba - that rendered every Palestinian a refugee in many parts of the world-, they unanimously agreed on the same description of the life as a refugee: statelessness and injustice in their respective locations. They consider *Al Nakba* a personal tragedy that undermined their lives, their future, the future of their children, their land rights and their history. Nonetheless, they unanimously express persistence to preserve the national heritage, insisting on pursuing freedom and reserving hope to exercise their right of return ([Palestine Liberalization Organization, 2019](#)).

Palestinian refugees have been subjected to double injustice in their homeland while being forced to pay the price for the occupation's violations of their rights, land, and resources. Refugees in exile, on the other hand, pay the price for internal crises and instability in their host countries. The legality of the right of refugees to return to their land and property is substantiated by several international conventions and resolutions based on the principles of international law. The most important sources of the right to return are found in UN resolutions and the Universal Declaration of Human Rights.

The occupation of Palestine not only confiscated the right of the Palestinian individual to his/her homeland and self-determination but also denied the exercise of his/her natural, human, political and legal right to return to his or her land. Achieving respect for the rights of Palestinian refugees is a duty of the international community who contributed to this tragedy. It is time to put an end to this tragic situation and to resolve it in accordance with the principles and rules of human rights and international law.



Carmen Colazo

PARAGUAY

Retos para la gobernabilidad democrática con enfoque de Derechos Humanos en el Sur de América

En América Latina, los procesos políticos desde los años 80, post dictaduras de los años 70, y electorales consecutivos en casi toda la región, dan esperanzas, aunque no aseguran un futuro de estabilidad político-económica o de equidad ([Grynspar, 2006](#)). Vivimos en una región signada por períodos cíclicos entre dictaduras y democracias ([Bordón, 2018](#); [Mainwaring y Perez Liñán, 2013](#)).

En el Sur, desde los últimos diez años, gobiernos de izquierda llegaron al poder por el voto (Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia), mejorando la situación de los y las pobres de sus países (un ejemplo paradigmático fue el Programa "Hambre Cero" de Ignacio Lula da Silva, que sacó de la pobreza a casi un 50 % de brasileros/as). No obstante, la corrupción endémica, que no fue ajena a las izquierdas, produjo el quiebre de estos gobiernos con énfasis social, y las derechas, cíclicamente, ofrecieron una "mayor seguridad", volvieron a tomar el poder (Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera en Chile), para restablecer "el orden" (valores siempre asignados a las derechas).

Recientemente acaba de ganar en Argentina la fórmula Fernández-Fernández, retomando las propuestas justicialistas y una nueva gestión (tercera en los últimos años) -con Cristina Kirchner como vicepresidenta- votando contra la asfixia económica a la gente del gobierno de Macri; y obviando las corrupciones de todo signo. Igualmente, en Brasil se pide el regreso de Lula y Dilma Rouseff para eliminar las políticas autoritarias, discriminatorias, antiecológicas, racistas y sexistas de Bolsonaro.

Según Eduardo Valdés y Ernesto Bohorlavsky, Evo Morales, después de un referéndum que lo inhabilita para un cuarto período electoral resiste una segunda vuelta - reclamada incluso por la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante las denuncias de fraude - denotando otra característica muy latinoamericana: "no querer dejar el poder y sus beneficios". También sucedió en Paraguay con el expresidente Horacio Cartes, que perdió su primera magistratura, en gran parte, por tratar de perpetuarse en un segundo período prohibido constitucionalmente. Ahora Mario Abdo Benítez continúa los gobiernos de derecha en el país, después del "golpe de estado" a Fernando Lugo, único gobernante de izquierda en la historia paraguaya.

Uruguay, por su parte, denota una difícil reelección del Frente Amplio, después de años de gobierno, en una segunda vuelta donde la derecha suma más fuerzas unidas que las izquierdas. En Chile, un país donde el socialismo llegó al poder por elecciones libres, se han mantenido etapas de gobiernos de izquierda y derecha, republicanamente alternados y respetuosos, lo que le permitió al país crecer y ser considerado un modelo a seguir en la región. No obstante, hoy, los movimientos sociales y la gente salieron a la calle a pedir derechos básicos insatisfechos.

Todo indica que ya no es suficiente preservar los cambios electorales; son tiempos de escucha y modificación de estructuras de exclusión y sometimiento (Saba, 2018). De otro modo, la inestabilidad será el signo de los tiempos, beneficiando a las organizaciones que sacan réditos de la desestabilización de los sistemas políticos, especialmente, las mafias globalmente organizadas (Bauman, 2001). Canadá, un país donde izquierdas y derechas conviven desde hace años en el sistema político, tiene gran responsabilidad para colaborar en un diálogo entre las Américas, para una gobernabilidad democrática y un desarrollo humano con calidad, sumando fuerzas favorables al desarrollo humano.

PERÚ

Gobernanza de los Recursos Hídricos en la Gestión Municipal

La gestión sostenible de los recursos naturales, en particular del agua, constituye una prioridad en los procesos de planificación territorial que corresponde cumplir a las autoridades municipales como actores públicos más cercanos a las demandas y necesidades de la población local. Agua y gobernanza a nivel municipal se articulan y entrelazan de una manera sustancial para contribuir al desarrollo territorial sostenible. Un poco de argumentación al respecto.

En primer lugar, el recurso hídrico fue desde la época prehispanica hasta ahora un factor de preocupación sustancial para el Perú. Cabe recordar que este país adolece no solamente de desigualdades económicas y sociales muy marcadas, sino también en la distribución de agua. Un escaso 2% del total de agua dulce discurre por la costa desértica peruana hacia el Pacífico, donde se concentra más del 70% del Producto Bruto Interno (PBI) y cerca del 70% de la población nacional. Casi 98% del agua restante se vierte hacia la selva tropical alimentando el Atlántico. Tanto el auge como el colapso de las culturas locales han estado mayormente relacionados con la disponibilidad, acceso, usufructo, distribución y calidad de ese recurso. Y no hay territorio bajo administración municipal que no tenga que considerar el aprovechamiento del agua para los fines múltiples que ello implica.

Sin embargo, el problema principal a considerar es la construcción de los procesos, mecanismos, marcos políticos y jurídicos, estrategias, planes de acción, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de instituciones mediante los cuales gobernantes, organizaciones de la sociedad y empresarios expresan sus intereses y ejercen sus derechos y obligaciones en relación a una justa gestión del agua. Es decir, a su adecuada gobernanza para que la población disfrute de este recurso en buenas condiciones de calidad y cantidad.

El factor de gobernanza aún se encuentra seriamente limitado, debido a una persistente ineficiencia en la gestión y ausencia de probidad en el cumplimiento de las funciones y competencias de las autoridades, así como a la limitada presencia de mecanismos de control y seguimiento para garantizar el derecho al agua que exigen las personas. Más del 50% de las urbes no reciben agua potable sino solo entubada; cerca del 80% de las aguas residuales domésticas y de los residuos sólidos, ambos de origen doméstico, no son tratadas y terminan contaminando ríos, lagos y mares. Ni que decir de otras fuentes de contaminación química proveniente de la actividad extractiva minera y de hidrocarburos, mayormente.



Carlos Herz

Con certeza la ausencia de gobernanza del agua es una expresión evidente de la crisis en los procesos de desarrollo local. Para enfrentar esa ausencia habrá que generar las condiciones políticas, económicas, ambientales y sociales que permitan el manejo eficiente y democrático del este recurso natural y una gestión ordenada, participativa y sostenida de cada territorio. Se trata también de dar cabida a nuevos liderazgos con tales visiones, que entiendan que el buen gobierno se sustenta en una estrecha interrelación entre los diversos actores institucionales, estableciendo acuerdos, consensos, pactos y compromisos responsables y reconociendo las capacidades, roles, potencialidades e intereses de cada cual. Sería una oportunidad para recrear la confianza en la gestión pública y en los mecanismos de democracia y participación innovadores.

USA

Civil Legal Aid Funding System in the United States

In the United States, civil legal aid organizations play an important role in the functioning of the judicial system, as they provide valuable services to low-income individuals with civil legal needs. There is a multiplicity of civil legal aid providers in each state, with different sizes, reaches, and approaches. This multitude and diversity of providers are one of the key strengths of the United States' Civil Legal Aid System.

The need for civil legal aid is significant. In 75% of civil cases in state courts, one or both parties are underrepresented. At the same time, 71% of low-income households in the United States experience at least one civil legal problem each year (Sandman, James J., 2019). Equal justice under the law as a right, and not a privilege, is a belief with a long tradition in the United States. Currently, this belief is shared by 82% of likely voters (Voices for Civil Justice, 2017). Not surprisingly, civil legal aid has long enjoyed broad bipartisan support in the United States Congress.

For almost fifty years, the United States has had a two-tiered system to fund their civil legal aid organizations. The first tier is at the federal level, and the second one is at the state level. Since its creation in 1974, the Legal Services Corporation (LSC), funded almost entirely by an annual appropriation from Congress, has been the nation's largest funder of civil legal aid for low-income citizens. The LSC currently funds 132 legal aid organizations from around the country. Typically, the LSC supports a handful of service providers in each state. For instance, during 2018, the LSC provided a total of \$5.7 million to the two largest civil legal aid providers in the state of Wisconsin. Between these two providers, Legal Action of Wisconsin and Wisconsin Judicare, all 72 counties in the state, plus the 11 federally recognized Native American nations are tried to be given coverage.

Despite some variations, funding for civil legal aid in each state comes from a variety of sources, such as 1) The trust account interest income (IOLTA) programs in each state, which allows attorneys to pool short-term or nominal deposits made on behalf of clients or third parties into one account. Until the 2008 financial crisis, this was by far the main source of funding for civil legal aid organizations at the state level. The interest generated by these accounts is remitted to the state entity in charge of administering the IOLTA funding for use in grantmaking.; 2) Annual "assessments" paid by actively practicing attorneys & judges, and fees paid by out of state lawyers, also known as Pro Hac Vice funding; 3) Some states appropriate state funds to be granted out to providers of civil legal services to low-income residents; 4) Occasionally, courts designate the state's IOLTA organization to receive residual funds from class-action lawsuits (Cy Pres) to use in making grants supporting civil legal aid; 5) Private foundations and charitable organizations, businesses, and individual donors; and 6) Local government funding.

Civil legal aid funding in the US is arguably well organized at the federal and state level. However, after the collapse of the funding model built around the revenue generated by the IOLTA programs, the funding for civil legal services at the state level is currently at a crisis, and new sources of funds need to be found to cover the minimal needs for those services. Funding for civil legal aid organizations from federal sources has been under an unprecedented attack by the United States President, who has proposed eliminating the LSC. It is not clear how long bipartisan support in the United States Congress will last considering the current political polarization the country is facing.



Carlos Arenas

Opinión ELECTIONS AND DEMOCRACY

QUESTIONS FROM JGG | ANSWERS BY THERESE PEARCE LAANELA



Therese Pearce Laanela is Head of the Electoral Processes team at International IDEA. She has 27 years of experience in elections and electoral assistance at the field and policy level. Her primary focus is the development of tools and knowledge products for use by election practitioners.

JGG: Which are some of the most successful actions to prevent and mitigate electoral violence in fragile and conflict-affected states?

Therese Pearce Laanela: Electoral violence manifests when unresolved societal grievances play out in the electoral arena. This happens because elections are high-visibility processes, political actors are at their most active, and stakes are high.

Consulting and collaborative forums are one way to foster a sense of common purpose, or at least common understanding, of the electoral process. Through our analysis of transitional elections (see our work on [Timing and Sequencing](#)), we've learned that a broad mobilization of both state actors (like electoral commissions, security sector agencies, judiciary, and media regulatory agencies) and non-state actors (like political parties, civil society organizations, media, reputable individuals and groups, including traditional leaders) is critical to promote and support peaceful conflict resolution throughout the electoral cycle.

These forums – which can be in the form of seminars, workshops, meetings or courses held well before an electoral event – can be designed as safe spaces where actors (who might potentially be on opposite sides of an electoral dispute) not only deliberate and learn to 'speak the same language' well in advance, but also jointly have access to relevant knowledge and tools. The [BRIDGE project](#) is one example of an effective methodology umbrella under which to have these conversations between stakeholders. [Risk mapping exercises](#) are another. During these, multiple actors can collaborate to share information on potential risk areas and can jointly access digital tools for data collection, analysis and action items. Other collaborative tools may include joint communication procedures or a designation of funds for joint interventions.

JGG: How can the independence and impartiality of electoral management bodies (EMBs) be strengthened so that the legitimacy of electoral processes is guaranteed?

Therese Pearce Laanela: Because an 'accepted' result is the key deliverable for an electoral process, legitimacy of the process and trust in its institutions takes on a special importance. Visible and demonstrable independence, as well as impartiality, are ways of gaining legitimacy and trust. Independence is statutory and structural, while impartiality is a behavioural concept whereby EMBs treat all actors fairly and work tirelessly to assure a level playing field for the elections.

Independence is strengthened structurally (i.e., through mandate, financing arrangements, accountability mechanisms, appointment procedures, ability to recruit staff, and institutional capacity to deliver). Fearless independence – the courage to protect the public good of fair electoral processes against powerful political pressures – is enabled when these institutional protections are in place. One typical example is a regulation that protects the tenure of election commissions against executive dismissal.

Impartiality is strengthened through comprehensive training and professional development programmes which add to institutional culture. Impartiality (or partiality) can manifest in any micro-interaction of an election officer with a voter, a candidate or a journalist. In these days of social media, an interaction gone wrong (e.g. a voter not finding herself on the voters register or a slip of the tongue at a press conference) can affect the overall reputation of the election. Well-created and holistic development programmes emphasize the ethical dimensions of the election's role and include the ability to roleplay, discuss, and test scenarios where impartiality may be at risk. The [Australian Electoral Commission](#) is an example of an institution that has embraced a vibrant learning environment for their staff and have reaped legitimacy rewards in the form of improvement to both performance and reputation.

Opinión **ELECCIONES Y DEMOCRACIA**

PREGUNTAS DE JGG | RESPUESTAS DE ERIKA BROCKMANN



Erika Brockmann es psicóloga con magister en Ciencia Política. Fue parlamentaria en Bolivia entre 1997 y 2006. Es consultora nacional e internacional, docente y columnista.

JGG: ¿Qué elementos similares atraviesan los países de sud y centro América en cuanto a su democracia, pese a las diferencias específicas de sus propios procesos?

Erika Brockmann: Cuatro décadas después del impulso propiciado por la tercera ola de instauración o recuperación de gobiernos democrático, la región experimenta turbulencias económicas, sociales y políticas que se reflejan en mayor ingobernabilidad e índices decrecientes de satisfacción con la democracia y el desempeño de sus instituciones, y lo que es peor, preferencia de formas autoritarias de gobierno. Costa Rica, Uruguay y Chile son los países más consistentes en su adhesión a la democracia. Venezuela, Nicaragua, Brasil y recientemente Bolivia ameritarían un análisis independiente debido a la instalación de gobiernos de autócratas electoralmente competitivos

Los insatisfechos con la democracia en la región se incrementaron de 51% el año 2008 a 71% el pasado año (Latino barómetro 2018), lo propio ocurre respecto a las organizaciones políticas que se debilitan, pierden confiabilidad y sus electorados son volátiles. Hay déficits en el cumplimiento de la función de representación, agregación y mediación entre sociedad y Estado. No es extraño que se hable de democracias sin partidos o de partidos sin militantes o de gobiernos con pulsiones hegemónicas que asfixian a los bloques minoritarios. La desigualdad social persistente abona el terreno para la polarización y deslegitimación de los mecanismos institucionales de mediación y garantías del ejercicio de derechos ciudadanos.

En economía, la discusión sobre el rol del estado y el mercado entre izquierda y derecha es insuficiente para explicar los problemas de la democracia contemporánea en la región. Es necesario incorporar nuevos elementos sobre el retroceso democrático a partir de los efectos de los “giros a la izquierda”, los ciclos económicos bonancibles y restrictivos y los giros hacia la “derecha”, más cortos en el

tiempo. El éxito de estilos populistas y autocráticos de liderazgo, la prevalencia de intercambios clientelares, la corrupción, los perfiles militaristas y las corrientes conservadoras religiosas se imbrican con el andamiaje del sistema presidencial predominante en la región. Las fórmulas del socialismo del siglo XXI y las del modelo “neoliberal” no aportan a encontrar salidas menos dicotómicas y polarizantes. Ambas registran fracasos y probaron sus propios límites y efectos nocivos en desarrollo político, social y económico sostenibles en el tiempo. La conflictividad y la crisis de gobernabilidad de distinto alcance e intensidad así lo demuestran, como en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil. A la luz de las lecciones aprendidas, los problemas detectados demandan buscar nuevos caminos.

JGG: ¿Qué papel están jugando las mujeres en los procesos electorales y la democracia en la región de América Latina?

Erika Brockmann: América Latina registra uno de los índices de mayor presencia y participación de las mujeres en el campo político y electoral, especialmente en la conformación de los órganos legislativos nacional y subnacionales. En menos de 25 años varios países de la región transitaron de la implantación de acciones afirmativas con cuotas mínimas hasta leyes sobre paridad y alternancia, como en Bolivia, México, Costa Rica, Ecuador, Argentina, entre otros países.

Estos cambios respondieron a instrumentos normativos gestados desde la comunidad internacional y al rol de las coaliciones plurales, redes y movimientos de mujeres emergentes a la par de la segunda ola de los feminismos, que contribuyeron a reconocer y revertir las brechas de desigualdad de género en los ámbitos público y privado. Avances impensables sin democracia.

Pero la inclusión operó en un sistema dominado por códigos patriarcales. Tuvo efectos no deseados, reacciones defensivas y acoso y violencia política. Los desafíos no son menores: fortalecimiento de las capacidades para el desempeño de responsabilidades políticas, democratización de roles y políticas redistributivas efectivas de los recursos simbólicos y materiales del poder.

Consultancies

JGG is conducting the final evaluation of a regional programme to end violence against women in the Western Balkans and Turkey.

This past July, a multidisciplinary and multinational team of JGG evaluators led by Kimberly Inksater, initiated the process for the final evaluation of the regional programme “Ending Violence against Women in the Western Balkans and Turkey: Implementing Norms, Changing Minds”. The programme aims to end violence against women and all forms of gender-based discrimination by (1) enabling a legislative and policy environment; (2) promoting favourable social norms; and (3) empowering women and girls (including those from disadvantaged groups) who have experienced discrimination or violence to advocate for and use relevant services. The programme has been financed by the European Commission and UN Women. In October, with the support of three international evaluators and six national consultants from each country, data was collected in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Turkey. Conclusions, lessons learned, and good practices will be shared with stakeholders in January 2020 when the evaluation is expected to be completed.



JGG team with stakeholders in Kosovo



JGG team in Turkey

JGG culmina evaluación final de proyecto para fortalecimiento de capacidades jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El equipo conformado por Carmen Beatriz Ruíz, Kimberly Inksater y Ricardo Changala acaban de concluir la evaluación final del proyecto “Fortaleciendo las Capacidades Jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Difusión de su Trabajo”. Este proyecto, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, buscó fortalecer a la Corte en aspectos como el monitoreo del cumplimiento de sentencias, el acercamiento a la sociedad civil e instituciones estatales, la digitalización de documentos, la diseminación de su trabajo y el apoyo a víctima de violaciones de derechos humanos carentes de recursos. El equipo sostuvo entrevistas individuales y grupales con personal de la Corte en San José, Costa Rica,



Equipo JGG en entrevistas con equipo de la Corte

así como entrevistas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales y defensores de derechos humanos en América Latina.

Consultancies continued...

Research study on Business and Human Rights completed.

Shift, the leading center of expertise of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), hired JGG to develop case studies to supplement anecdotal evidence in support of their Reporting Project's outcomes. The purpose of the project is to drive improvements in the reporting and management of human rights risks by corporations in order to have a reduced negative impact on people's human rights. The project was funded by the UK Department of International Development. A JGG team composed of Kimberly Inksater, Torwoli Dzuali, and José Miguel López developed six case studies with four companies and two institutional investors. The case studies showcase how the Project's tools, namely the UNGP Reporting Framework and Reporting Database, triggered changes in companies' and investors' practices and behaviours.

JGG Roundtable

JGG in collaboration with both, the School of International Development and Global Studies and the Human Rights Resource and Education Center of the University of Ottawa held its sixth roundtable event this November called, "Challenges and opportunities for Canadian companies to operate abroad while respecting human rights". Lloyd Lipsett, the founder of LKL International Consulting Inc. and contributor to JGG projects on business and human rights, served as the lead speaker. In his discussion with the audience, he touched on different issues. These include strategies for companies to manage the human rights risks and impacts associated with host governments as well as how companies can impose human rights and labour standards on their local contractors and suppliers.



Participants sharing their experience



Roundtable attendees

Participation at the 2019 CAIDP Conference

JGG Director, Kimberly Inksater, chaired the discussion panel on “Canadian Feminist International Assistance Policy: Global Leadership for International Development in the Age of Disruption” at the 2019 annual conference of the Canadian Association of International Development Professionals. The session discussed Canada’s leadership in driving an international development approach that situates gender equality and the empowerment of women and girls at the center of development assistance. The Conference took place in Ottawa on October 7th and 8th. [Attached photo “CAIDP” (Caption: Panelists at the CAIDP Conference)]



Panelists at the CAIDP Conference

New Manager

JGG welcomes Tiago Wisnevski as the new Manager (Operations). Tiago has been providing support for all administrative aspects of consultancy, knowledge, and network/corporate functions since late October. Tiago has extensive experience in the administration and operations management of projects. JGG would also like to thank John Sharp, our previous manager, for his hard work with JGG for over 2.5 years.



Just Governance Group

Contact Information

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org

José Miguel López, Staff Consultant: jm.lopez@justgovernancegroup.org

Carmen Beatriz Ruiz (Bolivia): cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Skype: JustGovernanceGroup

Tel: 613-729-5612

info@justgovernancegroup.org



justgovernancegroup.org